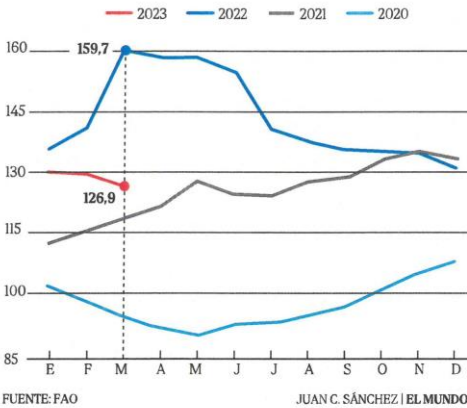


EL MUNDO (8/04/2023)

PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

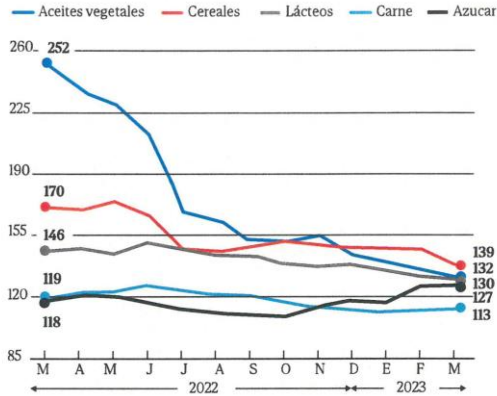
Promedio de los índices de precios ponderado con arreglo a las cuotas medias de exportación durante el período 2014-2016=100



FUENTE: FAO

JUAN C. SÁNCHEZ | EL MUNDO

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS



ción se ve agravada por la depreciación de sus monedas frente al dólar estadounidense o el euro y la creciente carga de la deuda», explicó ayer Máximo Torero, economista jefe de la FAO.

Los aceites vegetales son el grupo de alimentos que registraron la mayor devaluación, del 47,7% interanual, debido a la bajada del aceite de soja, de colza y de girasol, que contrarrestó con creces la subida de los precios mundiales del aceite de palma. Por su parte, el índice de precios de los cereales se sitúa un 18,6% por debajo de su nivel de marzo de 2022, siendo el trigo el que ha registrado el descenso más acusado. «como consecuencia de la abundante oferta mundial y la fuerte competencia entre exportadores», al que se une la prórroga que ha permitido a Ucrania seguir exportando desde los puertos del Mar Negro. También disminuyó el precio del maíz, principalmente por la abundante oferta de mercados sudamericanos como el brasileño; el de la cebada, el sorgo y el arroz. Este último ante las inminentes cosechas de países exportadores como la India, Tailandia y Vietnam.

Los lácteos cotizaron un 10,7% por debajo de los niveles de hace un año, por la bajada de las cotizaciones del queso y la leche en polvo, que contrarrestaron la subida de la mantequilla. El índice de precios de la carne fue un 5,3% inferior al de hace un año, mientras que el azúcar subió un 7,7% por las preocupaciones por la disminución de su disponibilidad a nivel mundial tras las previsiones de descenso de la producción en China, la India y Tailandia.

Los alimentos caen en el mercado mundial

España se descuelga del ámbito internacional, donde encadenan ya 12 meses de caídas

ALEJANDRA OLCESE MADRID

La cotización internacional de los alimentos acumula doce meses de caídas consecutivas, de forma que los alimentos son a cierre de marzo un 20,5% más baratos que hace un año y cuestan un 2,1% menos que en febrero, según publicó ayer la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés). Sin embargo, esta tendencia a la baja en el pre-

cio de los alimentos no se observa en los supermercados, ya que queda diluida a lo largo de toda la cadena alimentaria.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) aún no ha divulgado los datos desglosados del mes de marzo, pero en febrero el precio de los alimentos era un 16,6% más elevado que en febrero de 2022. En marzo, según los datos adelantados, los precios fueron en general un 3,3% más elevados

que hace un año, con lo que es descartable que los alimentos hayan experimentado una bajada interanual, como ocurre en los mercados mundiales.

Los costes energéticos, de producción y de transporte, el impacto de los márgenes comerciales, las escasas cosechas por la climatología y el desfase temporal que se produce desde que los precios empiezan a caer en el mercado internacional hasta que se

traslada la bajada al doméstico han impedido hasta la fecha que la cesta de la compra haya bajado en España.

«Si bien los precios cayeron a nivel mundial, siguen siendo muy altos y continúan aumentando en los mercados nacionales, lo que plantea desafíos adicionales para la seguridad alimentaria. Esto sucede sobre todo en los países en desarrollo importadores netos de alimentos, cuya situa-

LA RAZÓN (8/04/2023)

SEMÁFORO



Los regantes presentan un plan de medidas para combatir la inflación de los alimentos



Andrés del Campo

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que representa a más de 500.000 agricultores y más de dos millones de hectáreas, asegura en una jornada celebrada esta semana que para abaratar la cesta de la compra, rebajar los costes de producción en el campo sería más efectivo que topar los precios o vigilar la cadena de valor del sector agroalimentario. Y para ello, plantea un plan contra la inflación de los alimentos (actual-

mente al 15%). Han pedido reforzar el agua en la agenda política para garantizar el riego durante los próximos años, lo que amenaza seriamente la producción y podría seguir impulsando el precio de los alimentos. Además, urgen al Miteco a que elabore y promulgue una norma que contemple la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses y reclaman vuelven a Hacienda una rebaja del IVA al 5%.



Una mujer en un supermercado // EP

De la marca blanca a las cestas más pequeñas: así nos cambia la inflación

► La forma de consumir de los españoles ha dado un vuelco a causa de la subida de precios en el súper

NEREA SAN ESTEBAN
MADRID

La subida de precios en el supermercado ha revolucionado la forma de consumir de los españoles. Con la intención de gastar lo menos posible en cada compra, las cestas han ido cambiando por completo, tanto en forma como en contenido.

La forma que tienen es, de hecho, cada vez más pequeña. Los supermercados han detectado que quien entra a sus tiendas sale con menos artículos, haciendo una compra más selectiva y consciente. Como explican los expertos de Kantar en un informe reciente, el objetivo de los consumidores con esta estrategia es «controlar el gasto». Los artículos de esta nueva cesta no solo son menos, sino que también son diferentes.

De esta forma, el consumidor se fija

más en el precio y en los detalles de los lineales. Según la última encuesta de la citada consultora, el 49,5% de los españoles visita diferentes tiendas «para encontrar los mejores precios», haciéndolo un 3,9% más en 2022 que en 2021. Son más, hasta un 62,7% los que siempre comparan precios entre diferentes marcas antes de elegir una, creciendo estos consumidores un 5,1% en el último año. Además, el 48,9% (un 3% más) tiende a tener en cuenta varias marcas de los estantes antes de hacer su elección.

El reino de la marca blanca

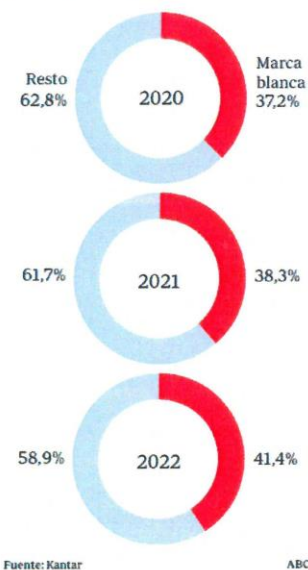
Una de las categorías beneficiadas por este cambio ha sido la marca de distribuidor o propia, más conocida como marca blanca.

Su presencia en los hogares españoles se ha multiplicado con fuerza en los últimos años: si en 2020 suponía el 37,2% de las cestas de gran consumo (alimentación, perfumería y droguería), en 2022 llegó hasta el 41,4%, un porcentaje que supera el 50% si hablamos solo de alimentación.

Ese interés por controlar el gasto en las compras también se está reflejando en otra tendencia, la de priori-

El peso de la marca blanca

En porcentaje sobre el total de productos de gran consumo: alimentación, droguería y perfumería



zar la compra de alimentos congelados y envasados frente a la de alimentos frescos; en particular, el pescado y la carne.

Como recoge NielsenIQ, el consumo de frescos se está viendo penalizado por la mayor adquisición de producto congelado o envasado, de precio más económico. Para muestra, un botón: en 2022, la fruta aumentó su precio un 15,8%; en ese periodo, su evolución en volumen reflejó una caída del 5,5%. En el caso del pescado, su precio se incrementó cerca de un 6%, y su

El Gobierno asume que en las cestas hay «mayor presencia» de pastas o legumbres y una reducción de carnes y pescados

evolución en volumen cayó un 9,1%. El consumo de verdura por su parte cayó en valor un 3%, mientras su precio se incrementó un 9,9%. Todos estos datos demuestran una tendencia clara, insisten los expertos: el aumento de los precios de los frescos ha supuesto que su nivel de compra baje en todos los formatos comerciales, desde supermercados hasta hipermercados pasando por pequeñas tiendas de alimentación.

La polémica del IVA

De hecho, estas cifras son algunas de las que ha estado manejando el Gobierno para decidir qué medidas pone en marcha para tratar de paliar los efectos de la inflación en la cesta de la compra. La elegida para entrar en vigor el pasado enero fue la rebaja del IVA, una medida en la que, pese a la caída evidente del consumo, no están incluidos alimentos como la carne y el pescado.

No en vano, reconocía el Ministerio de Agricultura en una reunión reciente con toda la cadena alimentaria, es evidente que «se acude menos veces a hacer la compra y el tique de cada una de ellas es menor». Además, asume el equipo de Luis Planas, «a pesar de que no se aprecian variaciones significativas en las grandes familias de alimentos que se compran, se nota una mayor presencia de productos básicos, como pan, arroz, pastas o legumbres, y una reducción en productos más caros, como carnes, pescados, frutas y verduras o aceite».

De hecho según las últimas estimaciones del sector pesquero, las ventas de sus productos en sus distintas presentaciones se ha contraído un 20% en nuestro país en los dos primeros meses del año frente a igual periodo del año anterior, algo que achacan precisamente a no haber sido incluidos en esta lista de alimentos básicos afectados por la rebaja.

¿Y qué hace la distribución ante esta situación? Como recoge Kantar, en enero se detectó un mayor porcentaje de compras en promoción, hasta un 10% sobre el volumen total de alimentación. En concreto, a través de ofertas en envase, folletos o reducciones de precios en el lineal.

La información que maneja el sector apunta a que estos cambios en el consumo seguirán manteniéndose en las próximas semanas, toda vez que el IPC de alimentación no dé un respiro. En febrero, los alimentos subieron un 16,6%, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

«Los incrementos de precios de los alimentos sobre los mismos meses del año 2022 siguen siendo importantes, y en la misma línea en las once primeras semanas del año», asume Kantar.

Salamanca inaugurará en 2024 la **mayor granja de insectos del mundo** para producir comida animal y biofertilizantes: «El mercado de la alimentación humana no está maduro»

Un «negocio sostenible» a base de gusanos

CLARA R. MIGUÉLEZ VALLADOLID

Salamanca inaugurará en 2024 una nueva gran fábrica, en concreto, la mayor granja de insectos del mundo. Espera poner su primera piedra «en los próximos meses»: con 90.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Peña Alta, Tebrio espera crear más de doscientos puestos de trabajo y facturar más de cien millones de euros. Todo gracias al crecimiento de un negocio en torno al tenebrio molitor, que es, en definitiva, un tipo de gusano. Con él, han desarrollado varias líneas de producto destinadas a la alimentación animal y de mascotas, así como biofertilizantes. Y de momento, con eso basta. Llevar la dieta insectívora a la mesa es algo sobre lo que sólo investigan, y de hecho prioriza explorar otros usos, como el de las soluciones industriales (creación de polímeros). «Para nosotros, poner un gusano en una ensalada es aún una anécdota, no creemos que el mercado de la alimentación humana esté maduro», apunta la directora ejecutiva (CEO) de Tebrio, Adriana Casillas.

Es una cuestión de aceptación. Y refiere que eso va antes de unas hipotéticas pautas de consumo para aprovecharse de los beneficios del alimento. «El jamón ibérico es uno de los mejores alimentos del mundo, pero si sólo te alimentas a base de ello, ¿será saludable?», cuestiona la directora de Tebrio, respecto a las limitaciones. Pero socialmente, el debate está en una etapa anterior: si bien Casillas remarca que los insectos son «totalmente sanos» y aptos para «formar parte de una dieta equilibrada», en España pocos se animarían hoy en día a normalizarlos como 'snack' o a hornear con harina a partir de alguna de las especies que empiezan a admitirse en la Unión Europea. «Los insectos se llevan consumiendo cientos de años, sólo que no en Europa, sino en Asia o Latinoamérica», recuerda.

Cambios en el sector

No obstante, el sector de los 'bichos' cambia también en el continente: «Ahora están surgiendo otras empresas y todas las regulaciones acompañan», marca Casillas, que señala mecanismos de corte ecologista, como el



Los fundadores de Tebrio, Adriana Casillas y Sabas de Diego. Arriba, larvas de 'tenebrio molitor' // TEBRIO

Pacto Verde, que en lo industrial premia reducir el uso de químicos o la huella de carbono de una empresa (o los gases de efecto invernadero que emite). «Habíamos detectado la necesidad de productos más sostenibles en alimentación animal, estudiamos varias alternativas y nos decidimos por ésta por resultar escalable y con costes de desarrollo razonables, pero cuando empezamos, nadie podía ni entender lo que hacíamos», confiesa la empresaria. «Era ilegal el uso de insectos en todo el mercado de la alimentación, y cuando la ley no lo especifica, al final no se puede hacer», afirma la también actual presidenta de la Plataforma Internacional de Insectos para Comida y Alimentación (IPIFF).

Y es que Tebrio lleva en pie desde 2012. Casillas fundó la empresa junto a Sabas de Diego -director tecnológico (CTO)- y en la actualidad su proyecto crece para abastecer tres grandes 'nichos' europeos que sí que demandan ya alimento en abundancia: la acuicultura, la avicultura y el porcino. Es decir, además de venderse para perros, periquitos y otras mascotas, el alimento a partir de gusanos que fabrican se utiliza para sustentar a peces, aves o cerdos, proporcionándoles una fuente de proteínas y un alimento hipoalérgico que «no entra en competencia con otra alimentación humana», recuerda Adriana Casillas.

«Utilizamos los insectos como sustento de alimentación animal para hacer que toda la cadena de valor sea mucho más sostenible y reducir su huella de carbono», refiere. «Queremos impactar en la base de la cadena agroalimentaria, proporcionar soluciones sostenibles», insiste Casillas, para asegurar que también sus abonos «aumentan el rendimiento de las cosechas» sin dañar el suelo.

Sin perder de vista esta filosofía, el nuevo complejo biotecnológico tendrá una parte destinada a la cría de gusanos (la «granja») y otra de transformación en la que «se aprovecha absolutamente todo», de la larva y el escarabajo a los excrementos. De momento, los vecinos de la capital del Tormes parecen dar una «buena acogida», valora ella. «Las reacciones están siendo muy positivas. Al final, es una nueva industria que significará puestos de trabajo», recuerda

Casillas. Cuando la megafactoría eche a andar, harán falta ingenieros, gestores y toda clase de operarios. «Es lo que Salamanca necesita», zanja la CEO de Tebrio.

«AGROMOBING»

Productores del Campo de Cartagena denuncian que se aprueban leyes para obligarles a malvender sus tierras para huertos solares



«SE NOS CONDENA A LA EXTINCIÓN»

Los agricultores se sienten al límite y avisan de que «si nos siguen estrangulando, los precios van a seguir subiendo»

L. R. V. CARTAGENA

Los agricultores del Campo de Cartagena están al borde de tirar la toalla. Un alud regulatorio está convirtiendo en inviable la actividad agraria en una comarca que nutre de hortalizas frescas a buen precio los supermercados españoles y de buena parte de Europa. Una de esas normas de reciente aprobación es la mal llamada ley del Mar Menor, que está propiciando un nuevo tipo de «mobbing», el «mobbing agrario», ya que la ley asfixia a los agricultores y obliga a convertir regadíos en terrenos baldíos. Y en este contexto, «sin duda planeado a conciencia porque en Murcia siempre tenemos sol», los agricultores sucumben a la presión de los fondos de inversión internacionales para convertir tierras de cultivo en campos de placas fotovoltaicas.

La subida de precios de los insumos agrícolas, como los fertilizantes y el combustible, ha puesto en jaque la rentabilidad de sus negocios. Además, las excesivas trabas burocráticas, la falta de apoyo gubernamental y los intereses especulativos de los productores de energías renovables componen un cóctel perfecto para que estos trabajadores de la tierra pierdan la esperanza, mientras se abre una bre-

cha de desconfianza entre los agricultores murcianos y los políticos locales.

Para tocar tierra y conocer de primera mano qué está pasando en el Campo de Cartagena hemos tenido la oportunidad de hablar con tres veteranos agricultores.

Mariano Melillas es un agricultor de tercera generación, que ha dedicado toda su vida al campo, pero que en los últimos años ha visto cómo su trabajo se ha convertido en una tarea cada vez más difícil y poco rentable. Ahora, ya retirado, su hijo y su hija se encargan de su finca en el Campo de Cartagena; todos ellos están preocupados por el futuro de su forma de vida. «Si no cambian las cosas, el campo murciano está sentenciado», dice Mariano.

«Solo me permiten utilizar abonado orgánico y eso hace que, en los meses de frío, al prohibir el nitrato, las plantas no crecen, o cuando crecen no lo hacen en suficiente cantidad o tamaño para poder entrar en los supermercados. De esta forma, se genera un problema tanto para los agricultores como para los consumidores, que se encuentran

Continúa en la página siguiente

 PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESERADIO
Preseradio.com - T 604 778 666

Viene de la página anterior

con escasez de determinados productos», explica.

Recrimina la prohibición del nitrato por, «según dicen desde las altas esferas», ser una de las razones por las que se contamina tanto el Mar Menor. «Una mentira más», sentencia.

Un reciente estudio de Agrolingenieros por el Mar Menor determinó que los niveles de nitrato en las aguas del Mar Menor eran menores que los de los años 70 u 80. Además de la falta de apoyo oficial, Mariano incide en la indefensión que siente ante los productores de energía renovables. «La declaración por ley de mi terreno como de secano me da una rentabilidad insuficiente y eso me deja en una situación vulnerable ante la expropiación para la instalación de placas solares», comenta. «Aprueban leyes para obligarnos a malvender nuestras tierras a fondos especulativos que alicatan el campo con un mar de placas solares», añade.

El campo es su vida, su pasión, pero las dificultades son cada vez mayores. «Estamos preocupados por el futuro. Si no hay cambios, no sé cómo vamos a seguir adelante», concluye.

Aumento de costes

Adela García Armero es una mujer agricultora de 54 años que se dedica al cultivo en unas 70 hectáreas de terreno. Es la primera mujer en obtener la Titularidad Compartida de su explotación agraria. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, Adela está preocupada por el futuro del campo. «Ahora afronto una crisis muy grave debido al aumento de los costes de producción, que no hacen más que subir mientras los productos que vendo no suben de precio».

Además de los precios, Adela se siente decepcionada por la imagen que se está vendiendo de los agricultores murcianos. Siente que es injusto que se culpabilice a todo un sector de la contaminación del Mar Menor. «A pesar de que se ha demostrado que la agricultura no es la principal causante de estos problemas, se nos estigmatiza por ello. La contaminación no viene del nitrato, sino del fósforo y el amoníaco que surgen de las aguas residuales, no del campo» afirma.

No hay futuro

Pedro León es un vecino de La Puebla que ve la situación tan mal como Adela. Pedro es un hombre luchador, que ha dedicado toda su vida al campo, pero también en este caso está enfrentando difícil-

En la imagen Paco León y Adela García posan delante de sus tierras de cultivo



Los precios seguirán subiendo porque cada día hay menos agricultores y superficie de cultivo»

Adela García



Las modificaciones legislativas son necesarias para que los fondos abandonen sus intereses»

Paco León



Ante todo reclamo un diálogo con la administración, algo que actualmente considero ausente»

Mariano Melillas



La contaminación del Mar Menor no viene del nitrato del campo, sino de las aguas residuales»

Adela García

Mariano Melillas es agricultor de tercera generación ya retirado



tades enormes. Según Pedro, «si la tierra no da rentabilidad y las empresas solares ofrecen dinero a cambio de la luz, al final la pura lógica del mercado es que la gente acabará dejando el campo».

Pedro se queja de que los agricultores murcianos están siendo víctimas de un plan legislativo, aprobado por el Gobierno regional mediante la Ley 3/2020, que promueve sustituir las tierras de cultivo de alimentos por plantas

fotovoltaicas. A pesar de que varias asociaciones de agricultores lo han denunciado, sus lamentos caen en saco roto. «Esta tentación de vender las tierras está haciendo que se pierda una tradición que se remonta a muchas generaciones atrás», cuenta con tristeza.

Con la llamada ley del Mar Menor dicen estar abocados a la desaparición: «Se nos condena a la extinción», proclaman. Insisten en

que es esencial que se realicen «modificaciones legislativas, que los fondos buitres especuladores abandonen sus intereses para convertir la Región en un mar de cristal a costa de la agricultura productiva». «Los habitantes de las ciudades deben saberlo: si nos siguen estrangulando, los precios seguirán subiendo y subiendo en los supermercados, porque cada día hay menos agricultores y superficie de cultivo».





española. Ojo con esto. La alimentación y el agua son bienes estratégicos que deberíamos proteger tanto o más que la energía o la defensa militar. Tener en nuestro territorio nuestra despensa es una de las mayores riquezas y fortalezas como país. Parece que no hemos aprendido nada de la pandemia ni de Ucrania.

¿Es posible cuadrar el círculo fotovoltaica y regadío?

Es perfectamente compatible. Las placas pueden ser un complemento perfecto y utilizar las tierras de secano o improductivas, y dejar las tierras de regadío para la producción agrícola. La implantación masiva de placas sin producción agrícola puede convertir al Campo de Cartagena en un desierto. Dejará los suelos, ahora protegidos por cubierta vegetal, desnudos, lo que generará un aumento de temperaturas, ya de por sí elevadísimas en estas zonas (35º en verano, que podrían subir hasta 45), lo que supondrá un avance de la desertificación, una de las amenazas del cambio climático.

¿Qué impacto tendrá en la soberanía alimentaria el acoso a la agricultura intensiva?

No es muy difícil de imaginar, y para muestra el caos que se produjo por la falta de mascarillas en la pandemia, o la falta de gas o cereales por la guerra de Ucrania. Hace pocas semanas se vieron imágenes en Inglaterra de estanterías con falta de tomate, pepino y pimiento. Si esto no nos hace reflexionar, tenemos un problema, porque la agricultura y los productos que consumimos no se hacen en los supermercados, nacen en el campo. Atacar a la mano que nos da de comer, esto es, el maltrato sistemático al campo, tendrá unas consecuencias.

¿Y en el precio de los productos para el consumidor final?

La falta de productos va a provocar la subida de la inflación. La cesta de la compra se va a convertir en algo inasumible, ya lo está siendo. No podemos pretender eliminar cultivos y obtener productos en abundancia, todo el año y económicos.

¿Puede pasar en España como en Países Bajos donde el sector agrario se ha unido políticamente?

Lo que ha ocurrido en Holanda es fruto de un hartazgo generalizado de la sociedad civil, que ha despertado y se ha dado cuenta de como los lobbys ecologistas han impuesto sus leyes en Europa haciendo inviable la agricultura y la ganadería, y han dicho «basta ya».

Adolfo García

Presidente de la Fundación Ingenio

«La cesta de la compra se va a convertir en algo inasumible»

L.R.V. CARTAGENA

Adolfo García es agricultor y preside la Fundación Ingenio, una organización que agrupa a productores y empresas del sector primario del Campo de Cartagena, la comarca que llena las vitrinas de los supermercados españoles y de media Europa de productos frescos a un precio razonable. Con la aprobación en 2020 de la ley del Mar Menor, la «huerta de Europa» está en vías de colapso, acosada por infinidad de regulaciones, la obligatoriedad del abandono de parte del regadío y una consecuencia programada por una ley pactada por el PP murciano y el Gobierno de Pedro Sánchez: el acoso de los fondos internacionales para hacerse a bajo precio con tierras devaluadas para instalar placas solares. La sustitución de huerta por cristales aboca a que haya menos productos frescos y, por tanto, mucho más caros. Los españoles, asegura Adolfo García, ya lo están notando en sus bolsillos.

¿Qué han tenido que hacer los productores desde la puesta en marcha de la ley del Mar Menor?

Adaptarse en tiempo récord a la mal llamada Ley de Recuperación del Mar Menor, en la que el 70% de su articulado está dedicado exclusivamente a hiperregular la agricultura, omitiendo regular el saneamiento urbano y la depuración, así como los incumplimientos de las administraciones competentes en su gestión, ayuntamientos y Gobierno regional. Es una ley incompleta que pretende dar solución a un problema multifactorial.

que tienen y no asumen. El caso más claro es la dejación en el mantenimiento de las redes de saneamiento y la falta de redimensionamiento de las estaciones en torno a la laguna. Las tierras se han devaluado desde que empezó todo, y tenemos claro que subyace oculto otro fin: la fotovoltaica. La prueba de la intencionalidad es llevar a cabo un cambio de modelo que

¿Cuál es la situación en la zona?

La agricultura está en clara fase de extinción. La regulación que sufre desde hace seis años evidencia una clara intención de dismantelar la «huerta de Europa». No se aborda el problema en su conjunto. Las Administraciones lo han simplificado de manera irresponsable, pero intencionada, buscando un chivo expiatorio: los agricultores. Una vez que estos han sido señalados como responsables únicos del problema, y eso ha calado en la sociedad, los políticos salen de rositas y se libran de la responsabilidad

que tienen y no asumen. El caso más claro es la dejación en el mantenimiento de las redes de saneamiento y la falta de redimensionamiento de las estaciones en torno a la laguna. Las tierras se han devaluado desde que empezó todo, y tenemos claro que subyace oculto otro fin: la fotovoltaica. La prueba de la intencionalidad es llevar a cabo un cambio de modelo que



Atacar a la mano que te da de comer, esto es, el maltrato al campo, tendrá unas consecuencias»

cambio fruta y verdura por megavatio la encontramos en el artículo 16 del Decreto Ley 2/2019, de 27 de diciembre, predecesor de la actual Ley 3/2020, el cual ya preveía que el uso de la tierra no se puede destinar a uso agrícola, pero sí a fotovoltaicas, única y exclusivamente, no a ninguna otra energía limpia o uso sostenible. Es un plan para poner alfombra roja a los especuladores a costa de miles de familias.

¿Están contra de la fotovoltaica?

Lo grave es ver cómo cada día tierras de regadío se convierten en huertos solares. Estamos sustituyendo alimentación por energía. ¿Puede haber mayor disparate en un mundo que en 2050 superará los 10.000 millones de habitantes? Nosotros no estamos en contra de las renovables, que, por cierto, no generan un sólo empleo más que cuando se construyen, pero que lo hagan en tierras improductivas, no dismantelando superficies cultivables, que generan alimentos y empleo.

¿Está el tejido agrícola en riesgo?

Por supuesto que sí, y se verá en breve. Es una pena que una agricultura como la del Campo de Cartagena, puntera en el mundo por su tecnificación en eficiencia hídrica y que está considerada como la más competitiva y sostenible, sólo comparable a la de Israel, esté desapareciendo. Y eso tendrá consecuencias en la soberanía alimentaria



Conducciones del trasvase Tajo-Segura en la Vega Baja // JUAN CARLOS SOLER

El «cataclismo» ecológico de dejar Alicante sin trasvases Tajo-Segura

► Dos universidades rebaten la justificación del Gobierno por el CO₂ y el coste de la luz

J. L. FERNÁNDEZ
ALICANTE

Expertos de las universidades de Alicante y Alcalá de Henares alertan con datos de un auténtico «cataclismo» económico y medioambiental para el sureste peninsular con los recortes anunciados a los trasvases del Tajo al Segura. En contra de los argumentos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para justificarlo, fundamentados en preservar la Naturaleza, estos informes apuntan a que frenar drásticamente las transferencias hídricas a Murcia y parte de la Comunidad Valenciana y Andalucía tendrá un efecto contraproducente.

Entre las consecuencias de no poder mantener los cultivos agrarios al mermar a la mitad los recursos de agua, además de la pérdida de suelos (por erosión y desertización), caerá la producción de oxígeno y la fijación del CO₂, ya que actualmente estos campos funcionan como un «sumidero de carbono», según explicó Alberto del Villar, doctor en Economía Aplicada y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Este aspecto menos conocido constituye un objetivo de la Unión Europea y se puede cuantificar también desde el punto de vista económico. Los beneficios en una zona como

el Campo de Cartagena se estiman en una horquilla de entre 640 y 6.414 euros por hectárea y año por las emisiones de CO₂, que dejan de producirse en la atmósfera, lo que eleva el montante a cerca de mil millones de euros al año. Por lo tanto, «más vale una hectárea regada por agua del trasvase que una hectárea de placas solares fotovoltaicas» para fijar CO₂, comparó este especialista en agua, que ha participado en foros internacionales, durante una jornada organizada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats).

Mezclar con otras aguas

«Además es fundamental por cuestión de calidad y mezcla con otras aguas», añadió Joaquín Melgarejo, catedrático de la Universidad de Alicante, en referencia a que los caudales trasvasados también se emplean para aprovechar combinados con otros residuales, que proceden de un tratamiento terciario de depuración.

Hay por lo tanto, «razones ambientales» para mantener el 'status quo' actual de conexión entre ambas cuencas, ya que buena parte de la reutilización hídrica procede de ese mix, al ser regeneradas y su recorte tendrá un «efecto multiplicador» con otras aguas, también porque sirve para mejorar la calidad de las desalinizadas, debido al boro que contienen estas últimas para los cítricos. Melgarejo calculó que, en total, cada año dejarán de aprovecharse otros 140 hectómetros cúbicos, más el centenar recortado a los trasvases, por la elevación anunciada de los cau-

dales ecológicos en el Tajo, que pasan de seis metros cúbicos actuales a 8,65 a partir de 2027, con una transición en ese periodo de cuatro años.

Paradójicamente, un volumen similar de agua (113 hectómetros) se «tiraron» en el último año, es decir, se desaprovecharon aunque estaban depuradas, ya que se vertieron al Tajo. Alberto del Villar detalló que con una población de siete millones de habitantes en la aglomeración urbana de Madrid, sólo el 1% de sus aguas fecales sin tratar equivalen a que una ciudad de 70.000 habitantes vertiera todos sus desechos líquidos al río. Por lo tanto, «aumentar el caudal para diluir la contaminación no tiene ningún sentido» como se pretende ahora por parte del Ministerio, a su juicio.

Aparte del CO₂, que dejará de eliminarse al perder masa arbórea y la actividad agraria, y de esa peor reutilización de aguas mezcladas, los planes del departamento de la ministra Teresa Ribera dispararán los costes energéticos y van a contravenir directrices europeas. Melgarejo recordó el proyecto de «conectar las desalinizadoras de Torreveja, Valdelelencisco y Águilas y bombear el agua hasta el embalse de la Rambla de Algeciras», contemplado por la Confederación Hi-

Los cultivos hacen de «sumidero de carbono» y generan mil millones de euros al año al reducir la polución, según la UE

LA FACTURA ECONÓMICA

Un coste laboral similar al del cerrojazo de la Ford

Con unos 15.000 puestos de trabajo directos en peligro, el catedrático de la Universidad de Alicante Joaquín Melgarejo comparó el coste laboral de diezmar el trasvase con el cerrojazo de la planta de automóviles de Almussafes.

Caída de la riqueza de 5,696 millones de euros

La actividad agraria arrastrará también a la industria agroalimentaria que se desarrolló en la zona del Segura, además de repercutir en el consumo interno.

Recaudación fiscal

La Administración notará también en la recaudación de impuestos esta pérdida de 27.000 hectáreas de la «huerta de Europa»: menos IRPF, IVA y más subsidios del paro.

drográfica del Segura (CHS). «Esto parece que sea gratis, y de nuevo el Ministerio llega ante una tesitura muy grave». «Al gasto en electricidad para desalar habrá que sumar el de elevar esos recursos hídricos generados y en Europa van a rechazar esta «hipoteca energética», dado que «está prohibido subvencionar agua para una actividad económica», según el catedrático de la Universidad de Alicante.

En números, se pasará de un consumo de energía de 1 kW/hora a 4 kW/hora. «¿En qué proporción se va a cubrir eso con plantas fotovoltaicas?, que a lo sumo van a trabajar ocho horas al día y las desalinizadoras tienen que funcionar las 24 horas», se preguntó Melgarejo, convencido de que esa alternativa del Gobierno «es inviable desde el punto de vista energético». Y este incremento repercutirá también en el precio final del agua para el regante, con «cálculos muy conservadores», el metro cúbico partirá de salida de 0,56 euros, aunque este experto aseguró que en un viaje a Tenerife comprobó que sale a 1,21 céntimos, en realidad, con lo que se pondrá «la soga al cuello» a los agricultores.

El director del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Andrés Molina, corroboró los «perjuicios ambientales» que el Ministerio desdén en la cuenca del Segura, también por el inevitable «consumo de combustibles fósiles» para contar con energía suficiente para la desalinización.

Este profesor de Derecho Administrativo apuntó que podrían reclamarse «posibles indemnizaciones muy cuantiosas», por responsabilidad patrimonial y lucro cesante, o una colectiva por acumulación de afectados, a través del Scrats, cuyo presidente, Lucas Jiménez, recordó las inversiones de las comunidades de regantes.